
LA CRISIS DE LA DERECHA

Eduardo Martín Toval



A estas alturas del siglo XX parece a primera vista complejo abordar un tema como el de la crisis de la derecha española. Especialmente porque pudiera parecer que habría que recurrir a toda una imaginaria de conceptos y análisis teóricos para desentrañar un mecanismo aparentemente complicado que se resiste a ser examinado con la «tecnología ideológica» a nuestro alcance.

A poco que se penetre en la materia, sin embargo, se cobra de inmediato otra impresión: ante el observador aparecen unos problemas recurrentes y unas endémicas incapacidades que la historia —como no podía ser de otra forma, por lo demás— se encarga de recordar. Puede tomarse como exponente aleatorio la Segunda Repú-

blica española donde los datos son incontestables. En el fracaso de aquel régimen como forma política que condujese a la tan necesitada modernización de la sociedad española juega un capital papel la falta de entendimiento de las múltiples formaciones en que se dividía el conservadurismo español y, más aún, la falta de fe en

la propia forma política. Elementos éstos que tienden a repetirse con machacona regularidad.

Otro dato aún, no por relativamente próximo menos evidente: la crisis del Estado franquista es una clara muestra más de la incapacidad de la derecha española para encontrar unas alternativas medianamente sólidas al franquismo agonizante que le permitiese una posición aventajada en el cambio hacia la democracia ya planteado como inexorable exigencia social. Tuvieron que darse en su seno casualidades e improvisaciones de último momento no exentas de efectos perversos —es decir, ni previstos ni deseados por, al menos, parte de sus promotores— para que en 1977 pareciese que mediante una iniciativa institucional, que conducirá en la formación de UCD, se habían corregido los endémicos males de la derecha. Aquella iniciativa que, con vocación de centro, sólo dejó millón y medio de votos a su derecha fue sólo un espejismo. Ello sin contar el trascendental papel jugado por las restantes fuerzas democráticas que con su madurez política hicieron que la transición fuese posible y no se frustrasen de nuevo unas legítimas expectativas sociales por querellas internas conservadoras.

Sobre todo ello se tendrá ocasión de volver más adelante habida cuenta afinidades y coincidencias, pero valgan las líneas anteriores como demarcación de los hitos por los que van a discurrir mis reflexiones sobre la crisis de la derecha española, que necesariamente habrán de vascular sobre el triple eje político-ideológico-parlamentario.

Una aclaración precisa seguramente para seguir el hilo de estas reflexiones: cuando de manera voluntariamente genérica utilizo el término «derecha» pretendo integrar todas las formaciones con las mismas connotaciones ya se intitulen de centro, ya se trate de formaciones nacionalistas o regionalistas. Cuando, por el contra-

La crisis del Estado franquista es una muestra más de la incapacidad de la derecha para encontrar una alternativa al franquismo español.

rio, en lo que sigue se descende a especificar la formación política, en especial al analizar su devenir histórico o sus programas, es por puras razones de coherencia

de la exposición.

*Cambios y transformaciones.
Los retos de la sociedad*

Siendo los datos históricos incontestables, sirven para introducir los siguientes interrogantes: ¿Son las disputas internas en que estructuralmente se ha venido moviendo la derecha española trasladables al momento presente? ¿Son suficientemente sustanciales los cambios sociales para que se resistan a su aplicación a la presente coyuntura de la derecha? La respuesta a ambas cuestiones debería ser afirmativa. Pero sólo debería serlo, como veremos.

Ciertamente, ni el nivel de modernización del país, ni su situación internacional, ni la cultura política de la sociedad, ni los actores políticos y sociales, ni, en fin, el sistema de representación en sentido sociológico pueden considerarse idénticos. Sin embargo, comprobaremos con perplejidad que desde la derecha, tal vez para salvar sus propias responsabilidades, se acude a fustigar, más o menos explícitamente, la forma política de convivencia a través de críticas al modelo de representación, la falta de eficacia de las instituciones, las deficiencias de los ámbitos de intermediación social o, lo que es más grave, las críticas al sistema constitucional de actores políticos, cuando no recurriendo a la vieja fórmula «la democracia es culpable».

Pues bien, al constatar en el suceder diario las enormes contradicciones en que se debate la derecha en este país, no se puede por menos que entender que carece de respuestas sólidas a los retos y demandas del año 2000, o, cuando menos, dudar de buena fe que se encuentre convencida

de sus responsabilidades respecto a una fecha ya no tan distante.

Su travesía de la transición ha carecido por completo de «continuum» y era mucho lo que este país se jugaba en cuanto a estabilidad. Salvo la iniciativa institucionalmente fomentada del proceso de transición, su trayectoria ha sido —es— un constante «fletar y reflotar» partidos ínfimos y líderes de coyuntura, espasmódicamente repetido en períodos electorales, para desgajarse luego de una contingente coalición, languidecen como una entelequia más o, simplemente, desaparecer. Todo ello, como es obvio, desprovisto del más elemental andamiaje ideológico.

Si convenimos en que estos planteamientos son cabalmente ciertos, surge de nuevo la interrogación. Con tan escaso acervo, ¿se encuentra la derecha española pre-

parada para el horizonte del siglo XXI? Es arriesgado y, seguramente, costoso conjeturarle un discreto futuro cuando ni de sus actitudes ni de sus programas de

actuación pueden inferirse posturas rigurosas no sólo frente a fenómenos que pudieran considerarse como más lejanos, como podrían ser la era tecnopolítica, la revolución microelectrónica o el futuro del empleo y el ocio de la sociedad informatizada; es que ni siquiera pueden encontrarse respuestas serias ante las demandas sociales más próximas.

Causas, datos y antecedentes de la crisis

Tanto el referéndum sobre la OTAN como la consulta electoral de junio pasado representan hitos importantes en la crisis actual de la derecha española, seguramente por haber pretendido lo que se ha dado en llamar «coalición negativa», evocadora de la incapacidad de las formaciones políticas de ese signo para plantear por sí solas alternativas políticas, como si descartasen de antemano la posibilidad de

acceder al gobierno. No es extraño, así, que ambos acontecimientos hayan sido claves en el discurrir de la crisis en que la derecha se debate.

Y aquí comienzan a aparecer las identidades históricas. Arrogantemente incapaces de asumir sus propias torpezas y descabros, pueden llegar incluso a socavar la estabilidad del sistema político por activa o por pasiva. Y en ello hay una constatable gradación de responsabilidades en el complejo entramado de siglas y líderes que cobijan a la derecha española. Obviamente es consecuencia, también, de la orfandad ideológica en que se mueve.

El primer ejemplo que ilustra las anteriores afirmaciones fue la génesis, desarrollo y extinción de UCD. En algún momento pudo parecer que esta formación

El referéndum OTAN y las elecciones de junio representan hitos importantes en la crisis actual de la derecha.

política rectificaría la inveterada tendencia de la derecha a las crisis, al constituirse como partido desde dentro de la Administración a partir de mayo de 1977.

Pronto, sin embargo, se desvela el espejismo. La propia descomposición político-organizativa interna de UCD y la incapacidad de sus rectores para aportar siquiera una elemental coherencia ideológica (Suárez primero y Rodríguez Sahagún y Calvo Sotelo más tarde, no lo consiguieron desde la presidencia del partido) provocan la fragmentación de los diferentes grupos de la derecha y recobran las constantes históricas de ésta: su tradicional estado de permanente crisis y su diseminación grupuscular en función de intereses particulares.

Una mirada por los partidos políticos que continúan en la escena política desde el inicio de la transición, sin sucumbir o resentirse en el intento, es el elemento más significativo de todo ello; porque la crisis de la derecha en su manifestación como partido no se agotó con la UCD, antes al contrario, en el plazo de cuatro años ha multiplicado su efecto en cascada. Si de aquélla se desgajaron PDP y CDS, tras

las elecciones de junio pasado hemos asistido a la práctica descomposición de Coalición Popular. Descomposición anunciada, por lo demás, tras las peculiares posturas adoptadas ante el referéndum. Y esto es sutilmente revelador de la profundidad de la crisis al invertir la práctica y desgajarse partidos y coaliciones con posterioridad a la consulta electoral, y no antes como honesta y coherentemente parecía reclamarles su papel de actores de intermediación político-social.

Así se llega ya, pues, a una primera conclusión, nada novedosa por lo demás: los cuatro años coincidentes de la II Legislatura han sido una constante carrera de los grupos citados por heredar el voto de UCD y ocupar el espacio dejado, lo que ha determinado que la crisis fuese manifiesta pero se encontrase larvada por imperativos no tanto ideológicos —que al no existir no condicionaban— como estratégicos electorales. Esa ha sido la constante y se aprecia con claridad en la peculiar posición adoptada por la Coalición Popular, la travesía en solitario del CDS, o el fletamiento de ambiciosas «operaciones» sin parangón. Los partidos nacionalistas, por su parte, han mantenido una posición atenta pero distante, no ajena tampoco a las crisis internas en unos casos o escaldadas en aventuras reformistas en otros.

El aspecto parlamentario ha sido un buen barómetro de la crisis. La Coalición Popular ya dejó traslucir su falta de identidad en los grandes temas de Estado. El ejemplo más señalado ha sido, sin duda, el de la política exterior y más particularmente el de la política de paz y seguridad, llegando al alucinante extremo de adoptar expresamente posiciones opuestas en absoluto con sus criterios de siempre en estos temas. Pero también en el diseño de los modelos de las leyes de mayor relevancia institucional, a pesar de la vocación centrista aludida. Acaso por influjo de la

**La crisis ha sido manifiesta
pero se encuentra larvada
por imperativos
no tanto ideológicos como
estratégicos electorales.**

figura del líder de su principal partido, en un intento de trascender el maridaje de los espíritus de los «siete magníficos» y de la UCD, la Coalición Popular ha mantenido actitudes y posiciones contrarias a lo que suele entenderse como responsabilidades de Estado. La muestra seguramente más significativa fue la tramitación parlamentaria de la reforma de la función pública: lo que llegó a ser un texto completo de Estatuto de la Función Pública acordado entre la mayoría socialista y la oposición popular se frustró finalmente por decisión expresa del líder de AP.

El CDS, por su parte, en su línea de atravesar el desierto intentó, como si de un trance se tratara, dejar pasar el tiempo, con no pocos y significativos silencios parlamentarios, dedicándose con más ahínco, al parecer, a lo que comúnmente se denominaría *marketing* populista de su líder. No podía ser de otro modo al tratarse de un partido sin mayor determinación ideológica que un proclamado «personalismo comunitario» de difícil clasificación desde el estricto análisis de teoría de las ideologías, por más que su Manifiesto político de arranque lo destaque con ambigüedad como una «tercera vía ideológica» pretendidamente «alternativa a los sistemas capitalista y marxista».

Pero si esa ha sido la situación parlamentaria, la verdadera clave interpretativa de la crisis de la derecha se encuentra, sin duda, en las contradictorias posiciones frente al referéndum de la OTAN, donde los analistas han querido ver planear la vieja fórmula de que la democracia es culpable. Quizá a estas alturas no se dispone de la suficiente perspectiva histórica para poderlo aseverar de manera definitiva, pero es claro su papel desencadenante de una crisis hasta ese momento larvada. No

es ocasión ésta, sin embargo, de analizar unas contradictorias posturas que pudieron afectar, sin hipérbolo, a la propia estabilidad del sistema constitucional, pero

interesa retener, empero, que el pueblo español, poniendo en evidencia a quienes cayeron en el error de entender que la sociedad no representa mucho más que un agregado social constitutivo de la masa, percibió perfectamente esta circunstancia, manifestando en las recientes elecciones su apuesta por el sistema constitucional y, en esa vía, su inequívoca preferencia por el partido socialista.

**El común denominador
de los programas
de la derecha es, junto con la
falta de coherencia,
el populismo.**

¿Qué papel juega en todo lo anterior la base ideológica de cada opción política? Es evidente que su importancia no es escasa. Sabido es que las ideologías no se reducen exclusivamente a unas ideas motrices que conformaran por sí solas la actuación política. La vieja discusión sobre la teoría y la práctica política puso de manifiesto que las ideologías políticas deben sustentarse sobre un triple eje integrado e indisoluble: principios, estrategia y táctica. Los primeros como esencia de la opción, y los dos últimos como requisitos de la manera de actuar. Naturalmente, cuando se prescinde de alguno de los ejes el contenido ideológico se muestra débil cuando no ausente. Este parece ser el caso de la derecha española que, al obsesionarse en cuestiones tácticas, se olvida de que los principios conforman toda acción y desprecia el valor de la estrategia y sus implicaciones. No teniendo en cuenta con ello que en una sociedad políticamente madura como la española —madurez que, además, fue preciso ir adquiriendo en una transición democrática desde un régimen con grandes déficits sociales— el bagaje ideológico no puede ser un mero artificio de *marketing* electoral, en el que quepan postulados de toda procedencia e incluso apócrifos con tal de que cuenten con envoltura populista, como parecen entender algunos. El contenido ideológico de las propuestas de actuación de cada grupo político se contiene en democracia en los programas que se someten al electorado. En ellos, por recientes, podemos también encontrar claves sobre

la crisis de la derecha. El común denominador de sus programas es, junto con la falta de coherencia, el populismo.

Coalición Popular, aquejada de dolencias internas tras el referéndum, presentó un programa que, lejos de incidir en planteamientos anteriores que hundían sus raíces en la reforma de la Constitución, buscó su «aggiornamento» en la importación de las ideas utilizadas en las anteriores elecciones legislativas francesas que, a su vez, traerían su causa de los «reaganomics». Giraría, por tanto, sobre ideas liberales como desregulación, desburocratización, reprivatización, etc., en la línea de consecución de un idílico —entienden— «Estado mínimo», intentando con ello un devanamiento del Estado en favor del libre juego de la economía de mercado. Este programa, además de ignorar las tradicionales carencias prestacionales del país respecto al resto de países del entorno al incorporar ideas del exterior en muchos casos sin traducción siquiera a la realidad española, tenía el principal efecto de dejar clarear el precario ideológico que aparejaba y que fue calificado por un diario nacional como «entre el liberalismo y la caverna».

El CDS, por su parte, tal vez sea el máximo exponente, junto con la singular operación PRD, de la tradicional y audaz orfandad ideológica de la derecha. A primera vista, para un observador desprevenido hubieran podido incluso reconocerse componentes socialdemócratas en su programa. Mas sólo es puro verbalismo. En su búsqueda del centro de gravedad permanente en política —antes fue el cóctel del personalismo comunitario— su programa recurre al artificio de la retórica ambigüedad del «todo cabe» tan característico del populismo, como muestran los apartados relativos a política económica, política militar, política exterior o sanidad. No menos paradigmática fue su postura ante el referéndum. En esas coordenadas es comprensible que fuese pospues-

to el congreso del partido, para poder competir electoralmente sin limitaciones de ideario: de ese modo, la ambigüedad serviría para poder conciliar sus propuestas de «derecho al bienestar» de la mano del sector público con la «supremacía del poder civil», utilizado fuera del contexto bipolar de contraposición con poder militar, y tantas y tantas contradicciones del programa electoral. El resumen es, pues, que se trata de una formación política sin bagaje ideológico medianamente sólido, por lo que cualquier aproximación al mismo desde otros postulados no puede sino producir perplejidad.

¿Qué opinión expresar de la llamada Operación Roca en el contexto de la crisis de la derecha española? Al tratarse de una experiencia sin precedente en el marco más próximo es sumamente difícil su caracterización. El no poder determinar to-

davía a estas alturas si se trataba de un partido independiente o agregado se traduce en la dificultad de analizar la propia opacidad de su pretendido ideario de par-

tida. A primera vista, examinando su programa, se detecta la completa influencia de las recetas «reaganomics». Vuelven a aparecer desregulaciones, desburocratizaciones, reprivatizaciones, flexibilizaciones, etc., en la línea del «Estado mínimo» liberal. Acaso su diferencia con el liberalismo postulado por CP fuese la incorporación por aquél de notas sobre la sociedad posindustrial y el debate tecnocrático, y el tratamiento no en exceso beligerante de las consecuencias del Estado de bienestar. No parece necesario recordar las enormes contradicciones de su puesta en escena, su casi inexistente implantación nacional, la autorrefutación inmanente de sus estructuras y la permanente duda de si se trataba de un partido sustantivo o adjetivo y vicario. Es preciso retener, a nuestros efectos, que fue la formación política más generosamente tratada en orden a su financiación, prácticamente en relación inversa a su respaldo electoral.

**La derecha española
parece incapaz de trascender
la concepción,
tanto tiempo manejada por ella,
del «Estado patrimonio».**

En cualquier caso, su estrepitoso fracaso electoral aporta tres consecuencias: 1) corrobora la madurez política de la sociedad española; 2) trasluce la incapacidad de la derecha para vertebrar alternativas sólidas de gobierno, y 3) manifiesta la imposibilidad del conservadurismo español para dotarse de un equipaje ideológico serio, ni siquiera en operaciones de nuevo cuño donde las hipotecas con el pasado de sus líderes deberían ser pretendidamente menores.

En realidad, el pueblo español, al dejar claro en las pasadas elecciones su rechazo a la aventura reformista y mostrar que sus preferencias seguían sin inclinarse por la oferta de la Coalición Popular, puso rotundamente de manifiesto su convencimiento de que las ideologías políticas deben ser un conjunto integrado de principios, estrategia y táctica, rehuendo las

mutilaciones oportunistas.

Sus perspectivas de futuro

Con el panorama descrito es difícil conjeturar por el futuro de la derecha. A falta de ello sí podemos detenernos en su más rabioso presente, a pocos meses de su descalabro electoral. La primera circunstancia ha sido la desmembración de la Coalición Popular, no por anunciada menos sorprendente. Si prácticamente después de las elecciones se producen las primeras disgregaciones, que afectan incluso al propio Secretario General de AP (que posteriormente inventa «Renovación Democrática»), el goteo posterior ha sido constante. A la salida del PDP se ha unido sin tardar el PL. Su consecuencia son tres nuevos intereses dispersos (PDP, RD y PL) y tres diputados sin adscripción momentánea. Todos ellos, por imperativos reglamentarios, integrados en el Grupo Mixto de la Cámara. Tras de ello aparecen las mismas actitudes que al comienzo señalaba respecto a la Segunda República y los estertores del Estado franquista: la derecha española parece incapaz de tras-

cender la concepción tanto tiempo manejada por ella del «Estado-patrimonio» entendido como gendarme propio para defender sus intereses particulares. Con sus planteamientos anarco-liberales da la impresión de resultar impotente para tener una visión del Estado como foro de la armonía social, de entender que el acuerdo social es un prerrequisito de aquél.

Son bien recientes las esperpénticas escenas de acciones parlamentarias en tropel que, desentendiéndose del más elemental rigor político y parlamentario, han hecho muchas veces simple seguidismo de los titulares de los medios de comunicación y, en más ocasiones de las presumibles en lógica pluralista, se han integrado en un frente común que diluía todas las supuestas personalidades políticas diferenciadas.

Incapaz, por tanto, de ver la viga en el ojo propio pero siempre dispuesta a detectar la mota en el ajeno, parece haberse lanzado a predicar los fallos del sistema, las insuficiencias de las instituciones, la crisis de los partidos, las deficiencias del Parlamento, la duda, incluso, de la propia legitimación de la democracia parlamentaria. Su propia arrogancia, la que, sin embargo, predicán del Gobierno y de la mayoría, no parece permitirles ver el verdadero núcleo del problema: si tal es su incapacidad para entenderse con los pretendidamente afines, casi imposible parece ser un potencial entendimiento con quienes difieren. Pero lo verdaderamente preocupante es que todo ello parece llevarles a la dichosa pregunta: ¿será la democracia la culpable?

Suficientemente serias y costosas han sido la transición como la propia consolidación democrática para que ni siquiera entre bromas y ve-
ras pueda introducirse la pregunta que hace tambalearse las más elementales convicciones de quien las suscite. Pero sería ingenuo que quienes tene-

mos responsabilidades públicas ignorásemos el poco trecho que media con las imputaciones a las instituciones democráticas. Se critica el reglamento, el procedimiento legislativo, el programa electoral, la actividad parlamentaria en suma, intentando involucrar a la opinión pública para, así, hacer de las instituciones un traje de caucho donde ellos quepan siempre, al paio de disputas internas y espasmódicas disgregaciones. Vendría a ser como aquellos trajes «prêt à porter» hechos para que sienten bien tanto al señor bajito de bigote como al fornido chicarrón del norte. Poco serio es, por supuesto, entender que las instituciones deben adaptarse a las internas convulsiones que cíclicamente viene padeciendo la derecha. Además, es cuando menos irresponsable debilitar las bases mismas del consenso social en que tiene su base la organización política, y resulta de todo punto temerario sugerir siquiera que existan cuestiones a dirimir fuera del marco institucional apelando a unas fracturas del sistema en cualquier caso sólo a ellos imputables.

Es idea común en el Derecho constitucional y la ciencia política distinguir entre actores y agentes políticos. Los actores políticos serían los intervinientes en el marco político con consagración o relevancia constitucional, quienes participan en la escena política. En el caso de la derecha española, serían actores Fraga, Suárez, Alzaga, Herrero de Miñón, Roca, etcétera, ahora también Hernández Mancha, como portavoces de los grupos políticos que representan, y en el medio natural que en las democracias es el Parlamento.

Por contra, los agentes serían quienes, a pesar de no intervenir directamente, muestran una clara vocación por incidir e

Poco serio es entender que las instituciones deben adaptarse a las internas convulsiones que cíclicamente viene padeciendo la derecha.

incluso conformar el panorama político. Los manuales dicen que cuando predominan los segundos sobre los primeros es síntoma de patología del sistema. Pues

bien, ésta parece ser la aspiración de la derecha española. Perdiendo paulatinamente su tradicional círculo de influencia, parece acudir a agentes políticos diversos (y

El gran cinismo, el gran fraude, la gran distorsión política es imputar al partido socialista la responsabilidad de que la alternativa no se dé.

lo empleo ahora no en el sentido de los manuales de ciencia política, como grupos de interés) ajenos de los genuinos actores políticos para así socavar la propia estabilidad del Gobierno, sin reparar —o tal vez sí— en que con ello puede implícitamente estarse abriendo una peligrosa quiebra de legitimidad del sistema político mismo.

Es deseable que se trate únicamente de una estrategia a plazo perentorio mal calculada, es decir, una mera cuestión táctica, y no es cuestión de dar fórmulas magistrales a los vecinos para que solucionen sus problemas domésticos. Pero sería conveniente sugerir, si se encuentran en juego sus perspectivas de futuro a corto y medio plazo, una seria revisión de sus postulados motrices, pues no siempre surge el providencial y amigable vecino que tercia en unas constantes disputas familiares que pueden llegar a afectar a todo el edificio.

Todas las fuerzas políticas representadas en el arco parlamentario es indudable que defendemos el pluralismo político y la alternativa en el gobernar como princi-

pios básicos, entre otros, de la convivencia democrática. Pero, en este momento histórico, corresponde el protagonismo en la realización de la alternancia a las fuerzas de la derecha. Su verdadero reto y responsabilidad es hoy consolidar el sistema de alternativa intentando conseguir el apoyo mayoritario de los ciudadanos a sus propuestas de gobierno. No es ésta hoy la responsabilidad de los socialistas. Nuestra tarea hoy es gobernar para el progreso y desde esa acción intentar concitar nuevos apoyos del pueblo.

El gran cinismo, el gran fraude, la gran distorsión política es imputar al partido socialista la responsabilidad de que la alternancia no se dé; querer inculparle que la derecha sea incapaz de ganar la confianza de los españoles es o una inmensa ceguera social o un descomunal atrevimiento.

En suma, la derecha está en crisis, pero la democracia no es culpable.